

## Política educativa

### Deuda

# Wert dice que el retraso en pagos a los concertados se arreglará "cuanto antes"

La "voluntad no es suficiente", denuncia el sindicato FSIE, que dice que "lo que deben hacer las administraciones es cumplir con la obligación de garantizar la gratuidad de la enseñanza a coste real"

### Por Magisnet

Más artículos de este autor

19/01/2012

**El ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha asegurado que existe una "voluntad máxima" entre los responsables de Educación de las comunidades gobernadas por el PP de conseguir los recursos financieros necesarios para solucionar, "cuanto antes", los retrasos en el pago a algunos centros concertados en distintas zonas.**



*De izda. a dcha., la secretaria de Estado, Montse Gomendio, el ministro Wert, la secretaria general del PP, M<sup>a</sup> Dolores de Cospedal y Sandra Moneo, en la reunión de ayer de los consejeros del PP. (Foto: J. Zorrilla)*



Wert ha hecho estas declaraciones tras la reunión con los responsables de Educación de las comunidades autónomas gobernadas por el PP, en la que también ha estado presente la presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal. A preguntas de los periodistas sobre los problemas económicos que sufren algunos colegios concertados en distintas comunidades, ha remarcado que los retrasos en el pago de las cantidades debidas a los colegios, "prácticamente en ningún caso se refieren a los salarios, se refieren a gastos de funcionamiento". "Lo que ha quedado acreditado en la reunión, es la voluntad máxima por los distintos responsables de las comunidades de conseguir los recursos financieros para solucionar en cuanto antes estas necesidades", ha subrayado. Además, ha recordado que en este momento se están discutiendo en el Gobierno líneas de soporte financiero que no se limitan al terreno educativo si no que alcanzan el pago a proveedores en otras áreas, y "consideramos que dentro de esas líneas está también el pago a que aquellos centros concertados" que pudieran tener problemas.

A su vez, el ministro ha indicado que la prioridad que asigna a que se respeten los derechos educativos básicos de todos los ciudadanos españoles al margen, entre otros, de los problemas financieros que pueda tener esa comunidad, va a permitir dar una solución "relativamente temprana, todo lo temprana que financieramente sea posible, a esos problemas más delicados en esas comunidades". Ha declarado también que los problemas derivados de la tensión financiera a la que están sometidas las comunidades autónomas y la repercusión que ello tiene en el sistema educativo han sido, un "asunto de preocupación". En ese aspecto ha señalado que las comunidades han convenido la necesidad de compartir experiencias y hacer una especie de círculos de mejora entre las comunidades, para conseguir "la máxima eficiencia en el manejo de los recursos destinados a Educación".

En este sentido ha explicado que en la reunión se han tratado las situaciones de aquellas comunidades que se encuentran más comprometidas desde el punto de vista financiero y que tienen mayor problema no solo con los conciertos si no con otras facetas de gasto del sistema educativo. Asimismo, ha explicado que la reunión ha sido un primera toma de contacto con los consejeros responsables de Educación del PP en la que han tenido la oportunidad de tratar la guía del Ministerio en materia educativa: "conseguir en el plazo más breve posible reducir los deficientes indicadores de rendimiento del sistema y muy especialmente el abandono escolar temprano". "Hemos coincidido –ha añadido el ministro– en que la necesidad de reducir ese abandono escolar temprano a través de las reformas y las medidas que puedan conducir al mismo, pasan de una forma esencial por reformar las enseñanzas de Formación Profesional de tal suerte que no se produzca el desfase que existe ahora mismo", ha concluido.

La Comunidad Valenciana, Baleares y Cataluña acumulan varios meses de retraso en el pago del dinero correspondiente al gasto de funcionamiento de los centros. Esto ocasiona un "grave perjuicio al personal de administración y servicios cuyo salario depende de esta partida económica y, por otra parte, los centros empiezan a no tener capacidad para seguir funcionando por lo que su cierre podría producirse de forma inminente dejando a los alumnos sin clase y a los profesores sin empleo", según denuncia FSIE.